

Rio Cauca

La Violencia Urbana en Colombia: Síntesis de un Estudio Exploratorio en una Ciudad Colombiana

Alvaro Camacho Guizado
Alvaro Guzmán Barney

Profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Inves-
tigadores del Cidse.

El fenómeno de la violencia no es particular de la sociedad colombiana, y al repetirse en todas las naciones con mayor o menor intensidad, parece ser un rasgo propio de la sociedad humana, aunque es claro también que su dinámica está estrechamente asociada con la historia particular de cada una o, en nuestro país muy particularmente, de las historias regionales. El caso colombiano se destaca tanto por el carácter endémico y persistente de su violencia como porque ésta asume características mucho más acentuadas en determinadas regiones y coyunturas. Así, se conoce como "la Violencia" un período relativamente especificable de la historia nacional: con algunas continuidades, pero ante todo con ciertas características diferenciadoras y sin tener necesariamente la misma magnitud, la sociedad colombiana parece estar atravesando por una nueva coyuntura de violencia concentrada en lo que va corrido de la década de los ochentas.

Colombia ha pasado por un proceso de cambio social y modernización bastante agudo entre 1950 y 1980. Valga el simple ejemplo de las modificaciones en la distribución rural y urbana de la población para comprender los cambios profundos por los que paso y está pasando el país. Nos ha interesado, en este contexto, indagar por la naturaleza social de la violencia urbana contemporánea sirviéndonos esencialmente del ejemplo de la ciudad de Cali.

Al hacerlo hemos confrontado las dificultades para hacer análisis con base en estadísticas de delitos, puesto que la violencia y el delito tienen comportamientos de tenden-

Nota: Este texto es una versión de un capítulo del trabajo "Indagaciones sobre la naturaleza social de la violencia urbana en Colombia", realizado en el CIDSE de la Universidad del Valle y financiado parcialmente por Colciencias. Aprovechamos la ocasión para agradecer a Jesús Alberto Valencia, Edgar Vásquez y Estanislao Zuleta por sus comentarios a una lectura del informe completo, así como la invaluable colaboración de Alberto Carvajal Panes so, Carmen Idalia Campo y Carmen Renjifo, algo más que auxiliares de investigación.

cias opuestas y por lo tanto se hace preciso resaltar la necesidad de delimitar lo que podría considerarse "delito violento"; adicionalmente hemos incluido también en el análisis a aquella violencia que jurídicamente no se considera delictiva. En síntesis, hemos tratado de delimitar el campo de la violencia en la sociedad y reconstruir a partir de allí las distintas relaciones sociales involucradas.

Esta diferencia entre violencia y delito es pertinente cuando se trata de examinar los dos fenómenos en las ciudades: en efecto, el delito y el sentimiento de inseguridad tienen un campo privilegiado en lo urbano: al hacer una identificación rápida y superficial entre delito y violencia se tiende a ubicar la raíz de la segunda en los sectores delincuenciales; pero sobre la base de la diferenciación de los dos fenómenos, la violencia debe ser vista como un elemento de estructuración del orden social que por lo tanto involucra actores, motivaciones, recursos y organizaciones e instituciones que pueden o no estar amparados por la legalidad. Es decir, sus significaciones sociales rebasan ese ámbito para colocarse en diferentes dimensiones de la sociedad.

Hemos tratado igualmente de mostrar que el grado de urbanización no se correlaciona necesariamente con mayores grados de violencia y que las expresiones que podemos encontrar en la ciudad bien pueden excederla y explicarse por fuera de su entorno. Las estadísticas para Colombia indican que las tasas de violencia urbana son mayores que las rurales, y que ambas son crecientes durante la década del ochenta y que las tasas rurales crecen de manera más acelerada. Pero las cifras también muestran que las grandes ciudades no tienen necesariamente las tasas mayores de violencia. Ciudades como Popayán y Villavicencio tienen tasas aproximadamente cinco veces mayores que Bogotá y Barranquilla, considerando los promedios para el período 1974-1986. Cada

LA VIOLENCIA URBANA EN COLOMBIA

ciudad es entonces un medio específico de desarrollo de la violencia. Más aún, los ejemplos de Popayán y Villavicencio indicarían que la violencia de estas ciudades no puede desligarse de las dinámicas de conflicto regional. A lo urbano y a la urbanización no se le puede asignar sino muy mediata e indirectamente el papel de parteras de la violencia.

Por qué entonces hablar de violencia urbana, más allá de la consideración puramente demográfica? Porque sin duda el medio urbano es privilegiado para observar la diferenciación de las relaciones sociales y en particular para estudiar las violencias: nuestro esfuerzo ha sido no solamente de introducir el tema sino de plantear, además, que en la violencia contemporánea es de fundamental importancia buscar conexiones entre sus diferentes tipos para poder entender la dinámica global del fenómeno en el país. Al hacer estas conexiones subrayamos el peso de las violencias no negociables sobre otras como la política y planteamos que la comprensión de la violencia se logra más cabalmente si se la mira a partir de relaciones sociales, y no reduciéndola al ámbito político, en contraste con una tendencia bastante arraigada entre los investigadores del tema.

De otro lado, una aproximación a la violencia a partir de la contabilización de la criminalidad es un buen comienzo para dilucidar las formas específicas de traducción de la pugnacidad en las relaciones sociales.¹ Si bien la explicación de la violencia colombiana obviamente no se puede agotar allí, sí se trata de un buen punto de partida, al menos para tener una imagen real de su magnitud, evitando así fantasear en abstracto, sin una base real. Finalmente, la ciudad es un medio privilegiado para hacer este ejercicio y en nuestro país Medellín y Cali, por razones fáciles de comprender, reúnen las condiciones

necesarias para ser una rica fuente de investigación.

Al considerar en las dos ciudades la situación a partir de las lesiones y los homicidios, se destaca que la tasa de lesiones por 10.000 habitantes disminuye de 52 en 1980 a 43 en 1986. Por el contrario, los homicidios presentan un aumento descomunal pasando de una tasa de 3 en 1980 a casi 8 en 1986, es decir multiplicándose 2 veces y media en siete años. Gráficamente se podría decir que el conflicto violento implícito en las relaciones sociales en las dos ciudades produjo menos lesionados pero aniquiló más adversarios. El rasgo específico es entonces que la violencia se lleva a su consecuencia extrema de muerte.

Comparativamente Cali tiene una tasa más alta (43 x 10.000) de lesiones que Medellín (38) entre 1980 y 1986, pero al considerar los homicidios, la de Medellín es 2 veces superior a la de Cali para el mismo período. En la capital de Antioquia se concentra entonces el rasgo de la violencia de la década asociado con la muerte.

Al mismo tiempo, la forma de llevar a cabo el hecho de violencia ha cambiado notablemente. Esto es ante todo válido en el caso de los homicidios. Si en 1980, 54% del total en ambas ciudades se realizó con armas de fuego, este porcentaje fue de 83% seis años más tarde. Comparativamente el aumento fue más drástico en el caso de Cali pues allí se pasó de un 50% del total de homicidios con armas de fuego a 85%. En nuestras ciudades se acude entonces crecientemente a las armas mortíferas para resolver los más diversos conflictos, y las consecuencias de su uso no dejan dudas sobre lo que se pretende con el opositor.

Al analizar las lesiones, los cambios en la forma en que se llevan a cabo no son en principio tan notables. Aumentan en ambas

ciudades aquéllas con armas de fuego pasando de 5% del total en 1980 a 10%; disminuye el uso de armas blancas de 34% a 33% y también las lesiones con medios contundentes se reducen de 61% a 57%. En este caso sus cambios se dan como consecuencia del armamentismo de la sociedad, pero se conserva un porcentaje muy importante de lesiones que se pueden ubicar en escenarios más tradicionalmente asociados con armas de menor capacidad de eliminación.

Veamos algunas características de las víctimas: en ambas ciudades el porcentaje de lesiones y homicidios en el grupo de edad de 15 a 44 años aumenta; para el conjunto del período, 86% de las lesiones y 86% de los homicidios se concentraron en este grupo de edad. La violencia de la década tiende en consecuencia a recaer de manera creciente sobre personas jóvenes y, si se nos permite decirlo así, en una primera fase de adultez. Este frío dato debe llevar a toda suerte de consideraciones acerca de la pérdida social y económica que significa el aniquilamiento de parte de la juventud urbana, así se pueda cínicamente considerar que tal hecho pierde significado al considerar que hay altas tasas de desempleo precisamente entre la población de estos grupos de edad. Comparativamente las lesiones tienen en este grupo de edad un mayor porcentaje en Cali, y en Medellín el de los homicidios es mayor.

Respecto del sexo de las víctimas, hay que destacar la estrecha relación entre homicidios y sexo masculino. Durante el período examinado y para ambas ciudades, 93% del total de homicidios tuvo a hombres como víctimas. Comparativamente también, este porcentaje es más acentuado en Medellín (94%) que en Cali (91%). La situación cambia al considerar las lesiones: el porcentaje de mujeres lesionadas es creciente durante los seis años. Si en 1980 36% de las lesiones recayeron en mujeres, este porcentaje fué de 41% en 1986.

Medellín tiene una mayor proporción de mujeres lesionadas (40%) que Cali (36%) durante todo el período. En conclusión, el género parece intervenir significativamente según se trate de lesiones u homicidios. Esto se precisa al relacionar sexo y medio utilizado en el hecho de violencia. En efecto, del total de mujeres lesionadas en ambas ciudades durante todo el período, 77% lo son a través de medios contundentes. La asociación de estas variables muestra la importancia cuantitativa de escenarios donde se oprime violentamente a uno de los géneros. A la vez, revela una mayor pugnacidad en el terreno de las relaciones personales, independientemente del orden social que se trate de defender o derrocar.

Respecto de los homicidios, la distribución se encuentra más equilibrada aunque los hombres tienen un porcentaje mayor (69%) que las mujeres (55%) de muertes con armas de fuego. Pero hay que destacar cómo 21% de los homicidios de mujeres se llevan a cabo con otros medios. De nuevo se corrobora que hay escenarios específicos que tienen a las mujeres como víctimas. Cali, por otra parte concentra en mayor medida que Medellín los porcentajes de lesiones con medios contundentes, mientras que en esta ciudad la proporción de mujeres víctimas de homicidio con armas de fuego es superior. Cali por su parte tiene un porcentaje mucho mayor de mujeres muertas por "otros" medios (28%) que Medellín (14%).

En síntesis, estamos frente a ciudades donde sus habitantes acuden crecientemente a las armas para resolver los conflictos, y asistimos por lo tanto a un aumento dramático de los homicidios que tienen ciertas particularidades iniciales: la violencia recae crecientemente en jóvenes y en hombres.

En especial las armas de fuego no son económicamente de fácil acceso, requieren alguna técnica para su manejo y mantenimiento, suponen muchas veces organizaciones que

sostienen a los victimarios y tienen consecuencias conocidas sobre las víctimas: su muerte. Ello nos tiene que inducir a pensar que no se trata simplemente de violencia ejercida por pobres como consecuencia de su miseria: más allá de esta explicación fácil debe buscarse la naturaleza y medios de, por ejemplo, las organizaciones que sirven de soporte para la actividad violenta generalizada.

De los datos presentados se desprende la pertinencia de diferenciar las violencias. Pero también se puede inferir que para el período examinado se destacan aquéllas que podríamos denominar "instrumentales": violencias donde hay intereses identificables, racionalizaciones sobre el uso de la fuerza, división del trabajo para su ejecución, víctimas y victimarios precisos que no necesariamente agotan a los actores en conflicto.

Para detallar la naturaleza múltiple de la violencia urbana caleña, hemos procedido a examinar los hechos acaecidos entre 1980 y 1986 y reportados por la prensa local.

En primer lugar, se realizó una clasificación según su campo principal de estructuración. Como resultado, 35% de ellos resultaron en el campo de conflicto económico, 9% en el político y 55% en el estrictamente social. El porcentaje restante corresponde a formas combinadas. Al determinar la direccionalidad de los hechos encontramos que, para cada campo, ésta puede tener como punto de partida el polo dominante o dominado de la relación social donde se presenta. Vemos cómo la violencia económica se ejerce prioritariamente desde el polo dominado (86%), la política esta prácticamente equilibrada (47%) y la del campo social se concentra fundamentalmente en el polo dominante (98%). Al detallar los hechos de cada campo en el período 1983-1986 encontramos que para cada año la económica tiene un porcentaje muy similar, alrededor de un promedio de 33%. La política

tiene variaciones muy importantes de un año a otro, con una cifra baja en 1983 (5%) que asciende y casi se triplica para 1985 (14%) y vuelve a bajar durante 1986. La social también cambia notablemente de año en año y aumenta en la medida en que disminuye la política. De aquí se desprende una conclusión importante sobre la estabilidad en el tiempo de ciertos campos de violencia y la especificidad de otros para ciertos años. Así, se podría decir que en el año 1985 en Cali proliferó la violencia del campo político y en 1986 la del campo social.

Finalmente al identificar escenarios de violencia dentro de los distintos campos aparecen como los más sobresalientes los atracos, las riñas, los ajustes de cuentas, los enfrentamientos militares, las limpiezas, el familiar y el de sexualidad. También con los escenarios se identificó su direccionalidad y la importancia de cada uno de ellos en el tiempo. Se destaca cómo ciertos escenarios son al mismo tiempo cuantitativamente muy importantes y relativamente rígidos en el tiempo: los atracos y las riñas, que suman 55% del total. Esto no sucede con tres escenarios que son altamente cambiantes y predominan en ciertos años: los enfrentamientos militares, los ajustes de cuentas y las limpiezas, que suman 32% de los hechos. Estos tres escenarios predominan y signan la violencia de Cali de los ochentas y particularmente entre 1984 y 1986.

Estas características, además de la propensión al homicidio, el recurso al arma de fuego, el carácter joven y masculino de las víctimas, son compatibles con la idea de que los enfrentamientos militares, las limpiezas y los ajustes de cuentas son los escenarios propios de la década. Vale entonces la pena profundizar en algunos de sus rasgos y preguntarse si hay conexiones entre ellos y de ellos con la dinámica global de la ciudad.

La organización de los victimarios

Además de los enfrentamientos entre aparatos militares que por definición incluyen actores altamente organizados y apoyados por infraestructuras muy definidas, los escenarios de limpieza y ajuste de cuentas presentan indicadores a partir de los cuales se infiere la existencia de organizaciones sostenedoras. La presencia de armas de fuego técnicamente complejas, de motos y automóviles, de dos o más victimarios, de mensajes que aclaran los motivos del homicidio y de manera sobresaliente el recurso al personaje siniestro del sicario, denotan que no nos encontramos frente a violencias espontáneas de individuos anónimos o pobres sin rumbo. Por el contrario, es una violencia que ostenta recursos y muestra planificación y organización para su desarrollo: sobresa la instrumentalidad de esta violencia. Ahora bien, cuáles son estas organizaciones? En el caso los enfrentamientos militares están claras: son el ejército y la policía de un lado y el M-19, prioritariamente, del otro.

En los ajustes de cuentas, es mucho más difícil llegar a precisiones. Indudablemente están presentes aquéllas que se mueven alrededor del tráfico de drogas ilícitas y que generalmente acuden a su propia justicia con la pena de muerte. El carácter del homicidio y la identidad de la víctima muchas veces dejan en claro el sentido de ajusticiamiento. Pero además los ajustes de cuentas pueden responder a conflictos propios de la vida privada que no se resuelven por la intervención de la Justicia del Estado; en este caso el conflicto no involucra en principio organizaciones, pero para llevar a cabo el ajuste de cuentas se acude a personas o entidades especializadas en el oficio de la muerte, es decir, no se dispone de una organización de violencia, pero se la contrata. Por su parte, las limpiezas muestran también características que pueden hacer pensar tanto

en personas que actúan por cuenta propia, los llamados justicieros, como en quienes obran a nombre de organizaciones, algunas de ellas identificadas en los mismos hechos de violencia: "Seguiremos ejecutando a subversivos y hampa criolla de Yumbo", es un letrero que se repite al lado de los muertos por limpieza de los años 1985 y 1986 en este municipio.

La selectividad de las víctimas

Estas formas de violencia que estamos examinando no recaen sobre cualquier persona. En el caso de la violencia propiamente política las víctimas son soldados, guerrilleros, policías o civiles cuya identidad política es clara. En los ajustes de cuentas, se trata de personas con antecedentes penales, grandes propietarios, personalidades del mundo judicial, comerciantes, miembros de los cuerpos de seguridad, entre otros. Pero es en el escenario de limpieza donde la selectividad es más insospechada. De 52 casos examinados entre 1985 y 1986, varios de ellos con más de cinco muertos cada uno, 20 estuvieron dirigidos contra personas pertenecientes a los bajos fondos de la ciudad, especialmente en algunos barrios de la ciudad. Allí murieron ladrones, basuqueros y personas identificadas como vagos por la prensa. Once de los casos fueron dirigidos contra homosexuales a los que se llegó a buscar en direcciones precisas. En una ocasión se usaron gases lacrimógenos para sacarlos de la vivienda donde se encontraban y después matarlos. Ocho de los casos se dirigieron contra recogedores de papel y personas que sencillamente eran pobres. Hubo dentro de esta modalidad un caso dramático de asesinato colectivo de personas que se encontraban durmiendo en los vecindarios de los ferrocarriles. Siete de los casos estaban dirigidos claramente contra dementes que usualmente se encontraban en ciertas esquinas de la ciudad.

Hubo también casos de limpiezas contra amnistiados del M-19 y, de manera muy sig-

nificativa, en las operaciones que se hacían desde motos o carros y que incluían un recorrido por distintos sitios de la ciudad, en varias oportunidades cayeron ciudadanos que se encontraban en los andenes de las vías por donde transitaban dichos vehículos. La más lógica inferencia, que por lo demás fue compartida por funcionarios investigadores y algunos periodistas, era que se trataba de liquidar posibles testigos, borrar toda huella. En otras palabras, las limpiezas iban dirigidas contra los sectores considerados descompuestos o nocivos para un determinado orden moral que buscaba reiterar su dominio: esa violencia se llevó a cabo como lección extrema de control social. Sus víctimas fueron los portadores de una identidad estigmatizada, o quienes se le parecían. O ciudadanos comunes y corrientes que deberían saber a qué atenerse frente al pronosticado "derrumbre moral".

En resumen, hemos querido mostrar cómo en ciertas formas de violencia urbana que parecen jugar un papel importante en la coyuntura de los años 1984-1986 en la ciudad, hay rasgos que denotan una importante instrumentalidad, esto quiere decir que en estos procesos no solamente hay actores e intereses que entran claramente en juego sino que, además, se ha racionalizado el uso y recurso a la violencia de tal manera que se sabe en qué circunstancias se la utiliza, con qué objetivos y los procedimientos más adecuados para ponerla en práctica.

Violencia Económica y Lucha de Clases

El análisis de la economía urbana caleña muestra una sociedad en la que la violencia económica tiene una innegable y significativa presencia. Pero como parece quedar claro, la explicación de la misma por la vía de la teoría sociológica que liga esa violencia con la pobreza y asigna a los pobres el papel dinámico en su gestión y concreción en hechos, no se dibuja nítidamente a partir de la

información disponible y del conocimiento normal de quien conozca a Cali, o para el efecto, cualquiera de nuestras ciudades.

Hemos presentado la distinción entre delincuencia y violencia porque confundir los términos lleva a equívocos de consecuencias serias no sólo en las explicaciones de las situaciones, sino -lo que es más grave- a políticas de orden represivo canalizados contra la población más desprotegida. Es muy probable que haya una estrecha relación entre delincuencia y pobreza, pero sólo si ignoramos los delitos típicos del cuello blanco y cuyos efectos tienen mucho más peso cualitativo que los pequeños robos cotidianos. Aunque la gente en general tienda a percibir que su problema de seguridad se relaciona directamente con la proliferación de pobres en la ciudad, lo cierto es que un peculado o una malversación de fondos en el sector público o en las organizaciones financieras privadas, por ejemplo, afecta a muchas más personas. En el país hay abundantes experiencias recientes, que han tenido como delincuentes a eminentes ciudadanos cuya integridad moral era indiscutida hasta el momento en que se descubrieron sus fechorías. De otro lado, a pesar de su escasez, las estadísticas sobre delincuencia de la Policía Nacional muestran cómo la inmensa mayoría de los capturados tienen oficios propios de pobres, cuando no son desempleados. Es claro que entre delincuencia y pobreza la relación es estrecha -y lógica, por lo demás-. Pero no se puede proyectar a la violencia.

Cali, creemos haberlo mostrado, y así es reconocido en Colombia, es una ciudad plagada de desigualdades sociales. Sin embargo, tanto ella como su área geográfica inmediata muestran indicadores que hacen concluir que la situación en términos comparativos no es tan mala: la ciudad y la región crecen, los sectores obreros industriales tienen niveles salariales por encima de los promedios

nacionales, así la gran industria provea relativamente poco empleo; los salarios rurales son comparativamente altos, la política fiscal y de gasto público local tiene un fuerte componente redistributivo, y su clase dirigente se ocupa con alguna eficacia en tareas de orden filantrópico que buscan mejorar las calidades de vida de los ciudadanos más pobres.

El examen de las cifras disponibles así como de la información de prensa presenta una ciudad ciertamente cruzada por la violencia económica, pero mucho más alarmante es que haya más violencia adscribible a la intolerancia social. Ello remite a una sociología del conflicto que tiene que profundizar en las bases sociales de esa actitud que, como se deduce de las fuentes empíricas, no es sólo el producto de la crueldad en las relaciones personales, familiares o las iras y desmesuras ocasionales. Es, como lo hemos insistido, también una violencia colectiva, organizada y que tiene entre sus metas la conservación del orden y la imagen que la ciudad se ha ganado por su pasado reciente.

Tal afirmación recibe algún apoyo empírico -precario por el momento, es bueno reiterarlo- de los datos presentados, que muestran como al lado de la violencia *contra* la propiedad hay una violencia *desde* la propiedad. Ya hemos resaltado el fenómeno que refleja cómo la justicia, la protección y la violencia privadas se arraigan en la ciudad con su secuela de muertos arrojados en vías públicas o lugares apartados, al tiempo con las muertes ejemplarizantes de personas con antecedentes judiciales, en cuyos cadáveres aparecen mensajes de advertencia a quienes oseen seguir el ejemplo de los muertos. La violencia desde la propiedad, igual que la inseguridad, se localizan en el temor a los pobres y aunque recibe menos atención pública, sin duda es socialmente más grave en cuanto rebasa con amplitud el orden y la legalidad en que supuestamente se basan.

Hay en Cali, pues, violencia económica de pobres y ricos, individual y colectiva, ocasional y organizada. En tales condiciones no es posible sustentar la teoría corriente que se ha criticado aquí por su simplismo y unilateralidad. Aunque nada hayamos dicho de algunas de sus bases, la confusión de actores sociales con sujetos empíricos, hemos planteado la crítica en su mismo terreno, a fin de colocar la información cuantitativa al servicio del debate sociológico en el terreno más evidente posible.

Pero si este es el panorama global de la violencia económica caleña, queda un área que hasta ahora no se ha explorado sistemáticamente en estas páginas: la violencia posible en confrontaciones de orden económico entre clases sociales, entre el capital y el trabajo, empleadores estatales y empleados del sector público, es decir, capitalistas y proletarios, dominadores y dominados. En el período estudiado la prensa reportó solamente cuatro episodios de violencia en actos de masas, equivalentes a menos del 1% del total. Esto refleja un clima realmente pacífico en la confrontación, que se lleva a cabo generalmente por medios altamente institucionalizados, en los que las violaciones del orden y las invitaciones al enfrentamiento violento son controladas por las partes en contienda. El máximo episodio puede consistir en una quema de buses de transporte público, en el cual generalmente no hay víctimas humanas.

Una notable excepción en el período fue el episodio ocurrido en 1983, cuando un transeúnte murió y dos quedaron heridos en un confuso hecho policial de persecución a vendedores callejeros. En ese hecho violento intervinieron tanto la ira popular desbocada, como la confusión de medios y fines, como la habilidad manipuladora de algunos políticos y la mesura de la autoridad local. Si bien ese hecho mostró la naturaleza precaria del orden

público urbano, también hizo ver que la violencia de masas no ha tenido mayores expresiones en la ciudad, dado el alto grado de control social, político y militar existente. Esta afirmación, sin embargo, no implica que se excluya la posibilidad de acciones de esta naturaleza: por el contrario, puede que haya nuevos episodios de violencia económica de masas, porque el descontento está ahí y las medidas de su control no son necesariamente suficientes en el largo plazo.

En efecto, uno de los candidatos en la reciente elección popular de alcaldes en la ciudad lanzó una crítica constante contra las autoridades locales por su corrupción e ineficiencia. A pesar de que pocos meses antes ese candidato había sido víctima de un atentado que casi le cuesta la vida, permanentemente insistió en que su acción de denuncia tema como motivación el impedir que por la acumulación de tensiones y descontento social se desbordara la ira popular, con los catastróficos efectos previsibles. Pronosticaba que de no actuar rápida y eficazmente, los pobladores más pobres invadirían los barrios residenciales de las clases media y alta, en una orgía interminable e incontrolable. Puede ser que esta retórica apocalíptica tenga más de demagogia que de verdad: pero no hay bases reales para pensar que el descontento popular no se exprese en algún momento. La violencia de la lucha económica de clases, dirigida contra la propiedad o el capital puede estar en el futuro pero no tiene en la actualidad el peso que le asignan quienes claman por medidas de control policiaco y militar.

Hay, desde luego, expresiones de desigualdad en los actos de violencia económica estudiados aunque no enfrenten directamente a desposeídos y propietarios. Y si esta modalidad es de alguna manera lucha de clases, entonces en Cali hay lucha económica de clases con expresiones violentas.

El que ésta se colectivice y organice es algo que depende no de la estructura social *per se*, sino del conjunto de acciones que de lado y lado: propietarios y no propietarios, ricos y pobres, dominantes y dominados, se gesten y expresen. De nuevo: puede estar en la agenda. Lo presentado aquí, sin embargo, ha tenido como meta describir un fenómeno real; el pronóstico de su desarrollo escapa a nuestra intención y posibilidades.

La violencia política y la coyuntura histórica.

De la descripción de la violencia política se colige claramente que si bien el número de hechos en este campo de conflicto social fue relativamente reducido frente a los presentados en los demás en el orden social caleño, ello no quiere decir que su importancia cuantitativa pueda ser menor que su significación sociológica e histórica. Parecería quedar claro, en efecto, que la violencia política local está en la raíz de una parte considerable de la explicación de la criminalidad que convirtió a Cali en una de las ciudades más violentas del país en los mediados de la década.

La coyuntura particular del proyecto de urbanización de la guerrilla, los mecanismos de defensa desarrollados y su desborde en acciones que superaron la confrontación armada y se desplazaron hacia las limpiezas, y los excesos en el celo con que algunos sectores de la ciudadanía acometieron para sí la tarea de liquidar indeseables sociales, indudablemente está en la base de la caracterización de la Cali de los ochentas. Si bien la violencia de limpiezas de orden social fue el rasgo típico de la coyuntura, no es menos cierto que la confrontación política entre las fuerzas armadas y la guerrilla se constituyeron en una clave esencial para darle dinámica a los procesos de limpieza. De nuevo, la magnitud cuantitativa de la violencia política no es más

que un pálido reflejo de su significación global.

Vale la pena insistir un poco en esta aparente reducción de lo político a las luchas por el poder o el control de aparatos del Estado. No se pretende con ella minimizar el efecto de este tipo de confrontación, ni de plantear que lo político ocupa un reducido espacio de interés para la ciudadanía. El tipo de apoyo que recibió el M-19 en algún momento de su vida legal muestra que hubo realmente un creciente interés por parte de sectores de la población caleña por hacer suyos algunos de los proyectos políticos de ese grupo, como fueron la ampliación de la participación ciudadana en las decisiones colectivas y la necesidad de apertura del sistema político para viabilizar tal participación.

Al mismo tiempo, es útil tal restricción operacional para hacer más claro aún uno de los puntos que tanto en esta ocasión como en otras hemos tratado de resaltar: la violencia política, con toda su importancia, es sólo una de las formas de violencia que signan a la sociedad colombiana. Las demás, aquellas que se expresan en los campos de conflicto económico y social tienen no sólo mayor significación cuantitativa, sino que a su vez le dan un sentido político al conjunto. En efecto, la violencia política es relativamente "negociable", como lo sostuvo el informe al Gobierno Nacional (Comisión, 1987), y en gran medida su nivel depende de las posibilidades de tal negociación, en la que intervienen tanto los grados de control que las partes tengan sobre su respectivas fuerzas como la voluntad política para encausar las contradicciones por vías no violentas.

Pero pensar que las otras formas son igualmente negociables no pasa de ser una ilusión. Ilusión que a su vez alimentan las dirigencias de los partidos políticos tradicionales, para quienes los acuerdos y las argucias de capillas son claves de solución. O de quienes creen que

las prácticas militares de represión han de ser respuesta a lo que se define esencialmente como un problema de subversión, con toda la estrechez que este término implica en el lenguaje político colombiano. Y si este tipo de gestiones son no sólo cortas sino contraproducentes, queda por pensar que el problema global de la violencia en la sociedad colombiana requiere una política general contra las bases sociales de la misma. No es éste el lugar para tal formulación, pero este aserto parece ser ampliamente aceptado por quienes han tratado de profundizar en el estudio del fenómeno saliéndose de la estrecha óptica partidista o militarista.

También es preciso hacer notar cómo nuestra tesis relativa al desborde de la violencia local implica que lo político, entendido más ampliamente como un proceso de confrontación no sólo por el control de los aparatos del Estado sino acerca de la vigencia, reforma o transformación de los arreglos institucionales que rigen la vida colectiva de los ciudadanos, ocupó un lugar importante en el proceso de la década. En efecto, el hecho de que hubiera una coincidencia temporal entre las tensiones producidas por la presencia guerrillera, las polarizaciones generadas por la política global de apertura del presidente Betancur y las limpiezas, remite a considerar que estamos frente a un conjunto de fenómenos altamente relacionados, y que la inflexibilidad de su naturaleza no puede resolverse con el simple recurso de asignarle una prioridad causal a cualquiera de ellos.

La experiencia de las limpiezas no puede examinarse simplemente como un "coletazo" de las confrontaciones entre aparatos militares de 1985. En primer lugar, ya ellas se habían manifestado anteriormente, aunque con muchísima menor intensidad. En segundo, las múltiples denuncias sobre las muertes de simpatizantes de la izquierda que se presentaron inclusive con anterioridad a la llegada

del M-19 y luego de su salida de la ciudad, atestiguan que muchas veces entre los indeseables eliminados había personas que eran así consideradas por sus ideas políticas o sus gestiones de cambio social por vías no plenamente aceptadas por la institucionalidad y las ideologías dominantes en su momento en la ciudad.

Todo lo anterior parece justificar nuestras dos opciones, vale decir, tratar de colocar a la violencia propiamente política en sus justas dimensiones, pero al mismo tiempo mostrar las tremendas implicaciones de tal forma de confrontar conflictos sociales que en otras sociedades se resuelven de manera incruenta.

Pero además del sentido político que tiene el conjunto de las violencias que hemos examinado, vale la pena señalar algunas de las características que ha asumido el proyecto de respuesta que se ha dado a la situación, y que muestra el significado político de la misma. Lo primero que se destaca es el cambio sustancial que ha experimentado la policía local. Al despido de un número importante de agentes le sucedió un visible esfuerzo de reorganización profunda del organismo. Fue así como se inició un proceso de sistematización mediante el cual la policía se encuentra en posesión de un volumen apreciable de información sobre la ciudadanía. Es de pensar que tal transformación puede convertirse en un poderoso auxiliar de la investigación policial e incrementará la eficiencia de la institución. Pero también es preocupante que eventualmente tal información sea utilizada para escudriñar vidas privadas e interferir en ellas. O que en manos inescrupulosas se convierta en instrumento de coacción y/o represión.

Otro cambio importante ha sido la fuerte descentralización de la vigilancia callejera: con una técnica consistente en desplazar parejas de agentes permanentemente por toda la ciudad, se da la impresión de una ciudad

constantemente protegida. Sin embargo, una sociedad así protegida es una sociedad vigilada. Si bien la constante presencia policial puede brindar a la población la sensación de seguridad por la que venía clamando, también es posible que esta constante vigilancia cree para los propios ciudadanos una imagen de sí mismos según la cual necesitan protección constante, lo que indicaría la imposibilidad de vivir en comunidad sin temor ante la falta de ella.

Cuando en el citado informe al Gobierno se decía que no puede sentirse fuerte una sociedad que se representa a sí misma mediante el recurso a las armas, estábamos pensando en la necesidad de acelerar y profundizar procesos de democratización que tengan como meta, entre otras, la ausencia total de armas, independientemente de las manos que las manejen. No se trata, desde luego, de que en Cali no haya cedido el uso de violencia que hemos tratado en este trabajo, y menos que en alguna medida esta reducción se deba a la presencia de la policía en las calles de la ciudad. Este es desde luego el precio que se tiene que pagar para que en la ciudadanía se reduzcan los niveles de inseguridad.

Al mismo tiempo que este refuerzo policial, otra respuesta ha sido profundizar las prácticas filantrópicas. En alguna entrevista concedida a una periodista extranjera, una distinguida dama de la sociedad caleña hacía el punto meridianamente claro: en su parecer se volvía completamente necesario desplegar tal práctica en los barrios más pobres de la ciudad, en coordinación con el Ejército, a fin de confrontar a la subversión por varios medios, uno de los cuales sería, precisamente, el cortar las posibilidades de que la población civil, por desafección frente al descuido y abandono por parte del Estado y de quienes sienten que tienen la responsabilidad de contribuir al mantenimiento del orden social global, se inclinara del lado de la oposición armada.

Finalmente, justo es anotar, un observador de la escena urbana caleña tiene que reconocer que se realiza un notable esfuerzo para construir mecanismos de participación popular, a la vez que se hace notoria la aceleración que las más recientes administraciones locales han dado al proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de la población más pobre de la ciudad, a pesar de que la inveterada práctica del clientelismo siga vigente.

Queda mucho por hacer, sin embargo, y no por lo hecho puede haber satisfacción. Baste saber que muchas de las condiciones objetivas que estuvieron asociadas con la acogida que el M-19 tuvo en algunas zonas de la ciudad pueden estar vigentes hoy día, y si bien no es de esperar una repetición de los procesos aquí descritos, tampoco es totalmente descartable un nuevo deterioro de la situación que recree en la ciudad los efectos mostrados.

Y quede una lección final: el proceso descrito tiene una fuerte similitud con el vivido en otras áreas del país: el desborde de una violencia que se articula con la protección de un orden, pero que asume una dinámica imparable, inclusive para quienes en algún momento la consideraron como un mecanismo de excepción para hacer frente a una amenaza de subversión.

La violencia social y la ética de la intolerancia

La diferenciación de escenarios en el campo de conflicto social es sensiblemente más compleja que en los demás y por lo mismo se hace más necesaria. Cada uno de ellos parece ser irreducible a explicaciones válidas para los demás: en principio, se puede pensar en dos categorías diferenciadoras: por un lado, formas de violencia que podemos considerar como prioritariamente privadas o interpersonales y que se basan en contradicciones de roles, intereses e identidades de la vida de las

personas. Son los casos, por ejemplo, de la violencia familiar, la que se expresa contra el género o en las riñas. Por otro, formas de violencia donde entran en juego actores colectivos y campos de conflicto que dependen de pugnas por intereses asociados con el orden de lo público, así sea no estatal. Un ejemplo claro se tiene con los escenarios de limpieza, que pueden ser activados tanto por ciudadanos privados como por agentes del Estado, pero que en todo caso tienen enormes implicaciones para la conservación del orden público.

Ciertamente, hay escenarios que en casos concretos son de difícil ubicación en una u otra categoría: esto sucede con los ajustes de cuentas que al exhibir características públicas tienden a identificarse con las limpiezas o que al asumir rasgos puramente privados pueden aparecer como simples riñas ocasionales.

Al examinar los escenarios de este campo en el tiempo encontramos que las formas privadas como las riñas, la familiar o la de género tienen un peso cuantitativo muy importante sobre el total. Se caracterizan porque no tienen variaciones significativas entre 1985 y 1986. Sucede lo contrario con violencias más públicas como los ajustes de cuentas y las limpiezas que de un año a otro se multiplican por dos en el primer caso y por cuatro en el segundo. Se infiere que las violencias de lo privado expresan entonces condiciones que por su rigidez sólo se modifican en el mediano o largo plazo, mientras que otras como las de limpieza claramente parecen depender para su expansión o contracción de condiciones más claramente coyunturales. Igualmente, aunque en menor medida, los ajustes de cuentas.

Al examinar más detenidamente los ajustes de cuentas, las limpiezas, las violencias familiar y de sexualidad, aparece el carácter espontáneo de las más privadas: la familiar y de sexualidad. Por el contrario, en las otras dos se destaca su carácter instrumental, selectivo

y organizado. Esto se concluye al observar la identidad de las víctimas, el estado en que quedaron, el uso de armas de fuego, automóviles y motos, la participación de sicarios y/o más de un victimario, y la identificación del victimario como miembro de algún grupo más o menos organizado. Es esta segunda clase de violencia la que se desarrolla predominantemente en la ciudad entre 1985 y 1986, y el escenario de limpieza es el que la representa más adecuadamente.

Al hacer esta afirmación vale la pena especificar dos salvedades. En primer lugar, no es la magnitud absoluta de esta violencia la que nos determina su importancia para el período. Es la significación que asume en relación con el conjunto de la violencia en la ciudad y las bases sociales que la sustentan, aspecto que profundizaremos más adelante. En segundo lugar, esta relevancia de la violencia pública y organizada no puede hacer olvidar al investigador acerca del grueso de las violencias, privadas gran parte de ellas, que permean nuestra cotidianidad y sobre las que se fija menos la atención que sobre las primeras. Su mismo carácter privado hace que sólo trasciendan los casos más graves, algunos de los cuales se llevan a la prensa con énfasis sensacionalista. Su medición estadística se encuentra así ampliamente subestimada, aunque su importancia radica en que nos involucra a todos en los espacios de la vida diaria ya sea como víctimas o como victimarios.

La violencia de limpiezas se ensaña contra las identidades más diversas: quienes tienen ideas políticas que retan al establecimiento, quienes esgrimen conductas sexuales no aceptadas, quienes manifiestan de manera más aguda ante la sociedad local su pobreza o locura y muy especialmente quienes llevan o parecen llevar el rótulo de delincuentes. La intolerancia frente a conductas que se desaprueban puede tomar las formas más variadas y las limpiezas son un caso extremo

en el que se acude a la aniquilación del opositor, buscando que la colectividad entienda la lección sobre el lugar que le corresponde a cada cual. Las limpiezas son una lección extrema de dominio allí donde no hay una sociedad ni una cultura democráticas. Por supuesto se trata también de una sociedad donde no hay un Estado fuerte que pueda canalizar de manera no violenta una determinada concepción de criminalidad y más amplia de conductas innovativas. Se crean así circunstancias para que intereses de dominio particular dispongan en su favor de aparatos del Estado, fundamentalmente de sus cuerpos de seguridad, para que intervengan según su concepción del orden social. O bien que dichos cuerpos de seguridad actúen a nombre propio pero de manera ilegal, lo que solo es posible si encuentran aprobación a su conducta en los mismos actores privados dominantes. O bien que estos mismos sectores consoliden independientemente de las fuerzas de seguridad sus propias organizaciones de limpieza. Todas estas variaciones se pueden encontrar en los casos de violencia social examinados, sin excluir la posibilidad de que alguna persona asuma como suya la tarea de restablecer los cañones de la conducta social. Así apareció y actuó más de un "justiciero" en la ciudad.

Los hechos de violencia de limpieza buscan generalmente que el público conozca abiertamente la acción violenta. El que esto suceda así nos lleva a afirmar su carácter y el objetivo final de recrear un orden de dominación más allá del económico o político.

Los énfasis corrientes en la estrecha caracterización como fundamentalmente política de nuestra violencia tienden a subestimar las manifestaciones de la misma en los ámbitos de las relaciones privadas o públicas no estatales, y, por el contrario, un número pequeño pero creciente de trabajos busca resaltarlas, con énfasis particular en el terreno familiar, pero sin que se logre una convincente

relación con el panorama global de la sociedad colombiana. Los 109 casos de ajustes de cuentas, los 154 de riñas reseñados en la prensa local durante el período 1980-1986 y las 1871 denuncias presentadas en Inspecciones de Policía en la ciudad en el primer semestre de 1988 son ilustrativos, a pesar de su fuerte subestimación, de la violencia que campea en los ámbitos de las relaciones inter-personales y que de alguna manera se constituye en una especie de telón de fondo a partir del cual se comprende la facilidad con que otras formas de violencia se desarrollan en la ciudad.

Una de las formas que asume esa violencia que aquí hemos llamado inter-personal es tema de reflexión de criminalistas, criminólogos, agentes del orden y trabajadores sociales, y aunque los datos aportados son en general muy valiosos, los esquemas interpretativos son bastante desiguales. Y cuando los teóricos de la política y las ciencias sociales la mencionan, lo hacen generalmente relegándola a un plano marginal, bajo el impropio título de violencia de la "delincuencia común". Nosotros, en cambio, hemos tratado de mostrar cómo esas formas pueden diferenciarse sin que la clave interpretativa se escinda en campos del saber y que los métodos que privilegian una violencia para el análisis y reducen las otras a una dimensión criminológica impongan una visión sesgada de la realidad.

La idea de hegemonía y la forma como ésta debe ser en principio eficaz no sólo para mantener un orden con alguna pretensión de legitimidad, sino para penetrar en las vidas privadas creando representaciones y simbolizaciones congruentes con los cánones promulgados por la clase dominante, ofrece perspectivas para la investigación creativa del tema. El examen de los límites y contradicciones de esa hegemonía abre vías para interpretar expresiones violentas y estar en una perspectiva de síntesis y globalización.

Esta vena de trabajo, pues, puede expandirse con investigaciones más detalladas que recurran a métodos y datos más cualitativos. Hemos tratado de abrir un camino para estudiar lo que podría considerarse como una clave para entender cómo se ejercen los poderes generalizadamente en una ciudad, como se trata de crear una imagen de organicidad social. En definitiva, cómo una clase dominante trata de convertirse en clase dirigente, y cómo correlativamente busca que las subalternas se conviertan en obedientes. En el fondo de este tipo de indagación hay una vena inagotable para interpretar procesos de vida y muerte como los que aquí hemos tratado de mostrar.

La información, muestral, parcial y en una dirección claramente cuantitativa y complementada con estudios de casos, da un paso en esa dirección, así sea por una vía particular. De nuevo, es pertinente preguntarse, qué hay en una ciudad que puede concitar unas violencias como las aquí mostradas? Tienen otras ciudades colombianas esos mismos rasgos?. No parece, por la información disponible, que Medellín o Bogotá puedan ser equiparadas con Cali en este respecto. Parecería que esas ciudades son más fragmentadas, más cruzadas por conflictos socio-económicos y socio-culturales; es decir, con menos capacidad de sus clases dominantes para crear el espacio de la hegemonía y la organicidad que se asocia tanto con muestras de inocultable civismo como de violencia de limpiezas. Parecen ser más signadas por competencias en sus fracciones dominantes, con nuevos sectores que retan el poder económico y social tradicional, y que ejercen su influjo a lo largo de la escala de estratificación social, y con unos sectores populares que a ojos vistas son más desafectos del orden que se trata de mantener, pero que carecen de posibilidades para presentar alguna forma de reto organizado al mismo. Su violencia tiende a ser más fragmentada, desorganizada y ligada con dimensiones privadas o

públicas no estatales de la vida social. Es decir, pueden proliferar las violencias de atracos, riñas, ajustes privados de cuentas, pero sólo ocasionalmente se observa la tremenda proliferación de limpiezas.

El comportamiento de las cifras muestra que nuestro punto de vista expresado hace algún tiempo acerca de la dimensión coyuntural de la violencia caleña (Camacho y Guzmán, 1986) tiende a confirmarse. Esto quiere decir que si bien la hegemonía está actuando, la otra cara de la moneda también es relevante: justamente las violencias sacan a la luz su fragilidad y muestran que algunas de las condiciones propicias para la violencia no se han erradicado: están sujetas a nuevas situaciones o coyunturas que las precipiten.

De otra parte, es claro que procesos de violencia como los señalados han de tener efectos deletéreos para la convivencia ciudadana. Al generalizarse el temor, se rompen vínculos sociales y se lanza a los individuos a "vivir privadamente lo público", es decir a atomizarse, a fragmentar sus relaciones sociales, a desconfiar del otro, ocultar sus intereses reales. En otras palabras, a "cuidarse". Pero también a endurecer la conciencia de la no solidaridad: dado que hay multiplicidad de fuentes de violencia, y que entre ellas la que administra justicia o arregla cuentas es tan evidente, la muerte de alguien puede explicarse con el recurso de pensar y decir que "en algo estaba metido".

Esta insolidaridad se traduce también en dificultades de organización de comunidades

para resolver problemas barriales o comunitarios: el proceso de autonomización no violenta de sectores populares se impide y sólo pueden subsistir aquellas organizaciones de corte tradicional, ligadas a los partidos institucionales, a figuras políticas o emanadas de aparatos del Estado. O las que se entroncan con la acción filantrópica local.

Y este cierre de lo público y comunitario implicaría también el que se privilegien las relaciones de índole estrictamente privada, como mecanismo de seguridad y refugio. Pero los datos sobre las violencias en estos terrenos muestran que éste no es solución, y que en esos ámbitos también se constituyen espacios violentos.

Las gestiones de erradicación de la violencia, por lo mismo, deben superar los ámbitos de lo público y también operar en estos terrenos. Una pedagogía de la democracia no puede consistir solamente en el aprendizaje de manejar civilizadamente las relaciones sociales e instituciones que tratan directamente con el Estado: los nichos de democracia también están en los interiores de las casas, en las relaciones conyugales y familiares, en las calles.

NOTA

1. En esta versión hemos redondeado las cifras de los porcentajes al suprimir los decimales; Cfr. "Indagaciones sobre la naturaleza social de la violencia...", op. cit.

BIBLIOGRAFIA

COMISIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LA VIOLENCIA, *Colombia: Violencia y Democracia*, Bogotá, Universidad Nacional, 1987

ALVARO CAMACHO Y ALVARO GUZMÁN, *"Políticas y Violencia en la*

coyuntura Colombiana actual", en Alvaro Camacho, (Compilador), *Colombia, Sociología y Sociedad*, Cali-Bogotá; CIDSE-FESCOL, 1986